

La dimensión social del desplazamiento interno:
complejidad social, pluralismo y el problema de Chiapas

*Federico Anaya Gallardo**

—No los queremos aquí. Ya no los necesitamos.

El general Morales replica:

—Ustedes dicen que si el Ejército se retira, la gente va a vivir en paz. No es cierto. Si hay división no es por el Ejército, sino porque hay formas de pensar diferentes entre ustedes.

Reporte de Herman Bellinghausen, sobre declaraciones del C. Gral. Div. D.E.M. Juan Morales Fuentes, comandante de la VII Región Militar (Tuxtla Gutiérrez) en el ejido chol de Emiliano Zapata, tierras bajas de Tila, Chiapas, 22 de enero de 2004.

Dice bien el general Morales: si hay división es porque hay formas de pensar diferentes en las comunidades humanas. Concluye mal el general Morales: el Ejército debe permanecer entre las comunidades para

* Especialista en materia de desplazados internos.

asegurar la paz. Esta escena, reportada por *La Jornada* apenas hace una semana, retrata de manera muy sintética el dilema de la militarización en las tierras bajas de Tila, Chiapas, región en la cual la palabra *desplazados* empezó a cobrar importancia en el debate mexicano contemporáneo hace ocho años, en 1995, cuando el grupo paramilitar Paz y Justicia salió a la luz.

Ahora bien, explicar el desplazamiento interno sólo como efecto de la militarización sería un error, pues sus raíces sociales son mucho más complejas. La escena descrita nos ayudará a entenderlas. Hace ocho años, siendo abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (CDHFBC), tuve el privilegio de caminar un corto trecho del sendero de la historia del desplazamiento interno con los compañeros choles de las comunidades vecinas al ejido Emiliano Zapata.

Del 4 al 11 de diciembre de 1995, gracias a las gestiones del párroco-abad de San José Tila, fui invitado a la comunidad de Masojá Shucjá, uno de los poblados del ejido Masojá Jolnixtié. Llegué a las tierras bajas de Tila vía Villahermosa y Salto de Agua, desde la ciudad de México, con la intención de pasar al menos una semana en las comunidades para documentar mi tesis doctoral. Este dato será relevante, como se verá después, porque yo no estaba allí en funciones oficiales del CDHFBC ni de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

En Shucjá conocí a 21 familias desplazadas (entre 80 y 100 individuos) provenientes del vecino ejido Miguel Alemán Valdés. En septiembre de 1995, sus casas habían sido quemadas en los poblados Tz'aquil y Curva-Chuctiejá. Apenas podían trabajar sus milpas, pues sus enemigos los *venadeaban*.

Al hacer el recuento de lo perdido en sus hogares, los desplazados hicieron un retrato de su situación económica: Cada jefe de familia posee o explota entre 1 y 2.5 hectáreas (ha), dedica 1 ha a la *iximilpa* (milpa de maíz), de la que se obtiene el alimento familiar y grano excedente para el mercado regional. Otra hectárea se dedica a café. Su rendimiento varía dependiendo del tipo de matas y de la edad de las mismas. Otra media hectárea se dedica a frijol, la cual rinde 2 costales de 120 kg cada uno. Los excedentes del maíz, el café y el frijol se venden para obtener dinero en efectivo.

El bulto de café de 47 kg se vendía, en 1995, desde \$6 hasta \$12. El bulto de 120 kg de frijol se vendía en \$420. Otra fuente de ingresos es

la venta de puercos, que se cotizan a \$300 cada uno. Se pueden vender sólo dos cerdos por unidad familiar cada año.

El ingreso anual en metálico más elevado en el área, de acuerdo con los estimados anteriores, se desglosaría de la siguiente manera:

1 500 (maíz)
840 (frijol)
8 000 (café)*
<u>600</u> (cerdos)
Total: \$10 940/año

Los campesinos choles del área solían completar sus ingresos por medio de trabajo asalariado en otras localidades o en los proyectos de construcción que apenas en 1994 iniciaron los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, el acceso a estos empleos temporales es aleatorio: está controlado por personas que manipulan estos empleos para aumentar su influencia económica, social o política. Los desplazados no pueden salir a trabajar fuera del poblado donde se refugiaron. Ello elimina cualquier salario del ingreso por familia.

Al tercer día de mi visita, los desplazados me pidieron que los acompañase el día siguiente a la cabecera del ejido, el poblado Miguel Alemán Valdés. El grupo era encabezado por los jóvenes Mario Torres Torres y José Tila López García, catequistas católicos. Ambos sobrepasaban apenas los 20 años, pero José Tila me acababa de presentar a sus dos hijitos, y la primogénita del primero nacería dos años más tarde. (José Tila fue asesinado menos de dos años más tarde, en 1997, luego de que una brigada internacional de observadores de derechos humanos visitó Shucjá.)

El 8 de diciembre de 1995, unas sesenta personas caminamos los dos kilómetros que separan Miguel Alemán de Shucjá. Íbamos hombres, mujeres y niños, en signo de no agresión. La reunión había sido concertada por comisiones de los desplazados con el gobierno estatal. Mario, José Tila y otros jóvenes líderes habían visitado Tuxtla Gutiérrez al menos tres veces desde que fueron desplazados. Se entrevistaron con funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno (Ssg, entonces a cargo de Uriel

* A \$12/bulto de matas maduras, en el mejor de los casos.

Jarquín, quien no sé si todavía esté prófugo por el caso Acteal) y de la Dirección General de Gobierno (DGG, a cargo de Mario Arturo Coutiño Farrera, luego candidato del partido de la rosa a la gubernatura en 2000). Estas instancias habían prometido una reunión de reconciliación en Miguel Alemán el 8 de diciembre. Prometieron convocar a diversas dependencias para atender integralmente la problemática y a la diócesis católica como testigo. (El fax-invitación fue recibido en la curia diocesana la noche del 6 de diciembre, demasiado tarde para que el obispo o el CDHFBC mandasen un representante hasta las tierras bajas de Tila... pero nadie contaba con que este abogado estaría precisamente en Shucjá haciendo trabajo de campo personal. Los religiosos dirían que el Espíritu Santo también tiene intervenidos los faxes.)

Al llegar a Miguel Alemán pudimos comprobar que la reunión de reconciliación no era tal. Trescientos hombres, todos ellos de comunidades militantes de Desarrollo, Paz y Justicia, esperaban alrededor de un templete las indicaciones de sus líderes (allí conocí a Marcos Albino Torres, entonces primer regidor del municipio de Tila y conspicua cabeza de la facción más violenta de Paz y Justicia, detenido por una temporada en Cerro Hueco después de 2000). Al llegar, estaban discutiendo su agenda: era una reunión de organización. Los funcionarios del estado de Chiapas nunca llegaron. En cambio, el poblado estaba rodeado de tropa de la policía (militarizada) de seguridad pública de Chiapas. Apenas llegamos, fuimos rodeados por los de Paz y Justicia y estuvimos sin poder movernos de la cancha de básquet unas seis horas. Desde ahí vimos cómo varios policías se dirigieron a pie al poblado Súsüclumil, situado al norte. Poco después, un helicóptero aterrizó en esa dirección y despegó más tarde. Luego de irse la aeronave, los policías regresaron a Miguel Alemán montados en caballos que mis acompañantes reconocieron como los de sus compañeros delegados de Súsüclumil. También vimos cómo los de Paz y Justicia bajaron a varias personas de una combi (pesera) a golpes y amarraron a uno de los maestros del ejido. Los de Paz y Justicia acusaban a los de Súsüclumil, al maestro y a nosotros de ser zapatistas, perredistas, agresores. Exigieron que allí mismo la policía nos disparase o que nos arrestasen a todos (mujeres y niños incluidos). En esa ocasión aprendí que de algo sirve tener cédula profesional de abogado, pues la presencia inesperada de un testigo ajeno a la región, que blandía en su mano una credencial oficial, desconcertó a los de Paz y

Justicia y a los policías estatales. Logramos negociar que la delegación de desplazados regresara a Shucjá antes de caer la noche.

El saldo de la reunión de reconciliación: seis detenidos (los delegados de Sūsüclumil), veinte hogares allanados en Sūsüclumil, un maestro rural vejado y secuestrado, varias personas golpeadas por ir en la misma pesera que el maestro. Una semana más tarde, presionado por la diócesis, el subsecretario Jarquín nombró a un delegado especial, el licenciado Enrique Aguilar Martínez (exalcalde de Venustiano Carranza) para reabrir las negociaciones en Miguel Alemán. El 16 de diciembre de 1995 volví al lugar con él, acompañado del fotógrafo del CDHFBC (Patricio Murphy). Los de Paz y Justicia estaban otra vez en una reunión de organización. Aguilar los convenció, a duras penas, de invitar a una comisión de desplazados. Fui a Schucjá para traerlos. Los desplazados enviaron a seis jóvenes representantes. La negociación fracasó. Los trescientos integrantes de Paz y Justicia se negaron a proporcionar un salón para que parlamentaran las partes. En cambio, exigieron que los desplazados reconociesen en público su culpabilidad por varios hechos de sangre (varios asesinatos y lesiones). Mario Torres tomó la palabra y sólo les dijo que ellos eran los agresores y que los desplazados no renunciarían a sus derechos ejidales. Acompañé a los desplazados de regreso a Shucjá, en medio de gran tensión y bajo la débil protección del delegado Aguilar (él mismo fue amenazado, cuando los de Paz y Justicia notaron que no los favorecía incondicionalmente). En el camino de regreso a la cabecera de Tila, uno de los campesinos de Paz y Justicia les dijo a los delegados: “Deben dejar esa su organización, que nada bueno les trae. Hay que aceptar la ayuda del gobierno y hacer lo debido”.

En estas dos ocasiones, noté con toda claridad cómo la gente de Paz y Justicia tenía gran temor de acercarse a Shucjá. A mitad del camino entre Miguel Alemán y ese poblado había una muy clara frontera política. Unos se llamaban priistas, otros perredistas. Los primeros eran acusados de *paramilitares*, los segundos de *zapattistas*. Unos recibían apoyos del gobierno, otros los rechazaban. El gran aliado geopolítico de Miguel Alemán en la región era El Limar, un poblado antiguo (las crónicas coloniales le llamaban Bulugib en el siglo XVIII) y próspero, digno de ser cabecera municipal y parroquia –peticiones reiteradas por sus habitantes desde el siglo XIX. En cambio, Shucjá carece de un centro urbano mayor. Pastores presbiterianos

se encuentran ahí desde la década de los treinta, catequistas católicos desde los sesenta. Un conflicto sumamente complejo.

Estamos ante una situación simple y compleja a la vez. El centro del problema es escueto: la división. Pero ésta tiene su origen en el pluralismo. Y el pluralismo nace de varias fuentes, cada una de ellas compleja y paradójica. Revisémoslas.

La geodemografía. Aunque la sabiduría popular dice que la revolución mexicana no llegó a Chiapas, los números no mienten. Hacia 1990, 60 por ciento de la tierra de labor era ejidal o comunal (90 por ciento en la selva, región en que se ha incluido a los choles). La formación de ejidos trajo un paquete mínimo (vergonzosamente mínimo) de vacunas y atención médica, caminos (siempre malos, siempre insuficientes), y maestros indígenas (heroicos pero mal pagados, simultáneamente manipulados y manipuladores). Estos servicios insertaron a las comunidades indígenas en la sociedad nacional. Favorecieron el incremento de la población al reducir las defunciones y abrir nuevas expectativas de desarrollo comunitario y personal, pero crearon conciencia de la injusticia histórica y estructural en que vivían los pueblos antes aislados. A partir de estas ventajas y desventajas, cada individuo y cada comunidad han venido optando, de modo más o menos libre, por diversas estrategias.

La economía. La creciente prevalencia de la economía ejidal y la paulatina desaparición del acasillamiento en fincas tradicionales puso a las familias y comunidades campesinas en contacto directo con el mercado. La reforma agraria eliminó a una clase parasitaria (los finqueros), pero no la sustituyó por algún otro intermediario/amortiguador social frente al mercado. El desarrollo diferenciado entre Tabasco y Chiapas provoca migraciones estacionales. Los choles (“milperos” en su lengua) de Tila son trabajadores de la construcción en Villahermosa. Estas experiencias son otro *éxodo* del que poco hemos investigado (el famoso es el que colonizó Lacandonia).

En cuanto *éxodo*, la migración estacional a la ciudad es esperanza de liberación y simultáneamente sufrimiento por el tránsito de una situación social sencilla a otra más compleja. (Procesos similares son los que ocurrieron en Los Altos respecto de las presas hidroeléctricas de los años setenta y los que ahora suceden con relación al trabajo en los Estados Unidos.)

Las remesas de los migrantes provocan diferenciación en las comunidades. Algunas familias prosperan más que otras. Se inician procesos de acumulación. Se incrementan las diferencias entre las clases sociales (éstas ya existían). El éxodo también es individuación y la individuación provoca siempre procesos conflictivos de afirmación/ reafirmación por una parte, y de pérdida de control por la otra. Jesús Morales Bermúdez lo retrata poéticamente:¹

Se fue a la selva el Ezequiel.

El Ezequiel.

Se fue.

Pué.

El Ezequiel.

Hasta el día de ora que ahí se anda el Ezequiel.

En selva, el Ezequiel.

En selva.

En selva.

La organización social. En Chiapas, como en todo México, las regiones rurales han reclamado por su aislamiento, desde 1950. Para combatir ese aislamiento se han aplicado en el campo muchas estrategias, desde la oficialista, tecnicista-vertical Revolución Verde, hasta la guerrilla antisistémica. Entre estos dos extremos, hay una gama fascinante de experimentos en organización popular, la mayor parte de ellos socialistas en sus persuasiones filosóficas. Sólo mencionaré aquí el más conspicuo y controversial: la red de organizaciones populares creadas por Política Popular-Línea Proletaria entre 1970 y 1990. Sus movilizaciones rurales (que tienen, por cierto, una contraparte urbana poderosísima) provocaron dos paradojas más. Primera: clarificaron –aún más– las injustas divisiones entre campo y ciudad (campesino y ciudadano); productores y comercializadores; indios y ladinos (o criollos, mestizos, blancos, como el lector prefiera definirlos). Segunda: socializaron entre las masas estrategias e instrumentos de análisis políticos, patrimonio exclusivo de las élites (las instituciones o las vanguardias

¹ *Memorial del tiempo*, 1987, p. 139. (Nótese que Ezequiel es el profeta del exilio, el que hace promesa personalísima de seguir siendo guardián del legado de sus antepasados durante el “desplazamiento” de su pueblo en Babilonia.)

revolucionarias). Las masas se las han ido apropiando, pero no como los seudomaoístas de Política Popular (PP) esperaban. Las “masas” son conjuntos complejos de individuos, liderazgos en competencia, familias, grupos de edad, redes de apoyo económico e ideológico, etcétera. Cada una de las partes de esos conjuntos participó (de modo diferenciado, por supuesto) en la apropiación de los instrumentos que los cientos de cuadros *pepes* les entregaron. Igualmente, cada quien se apropió de la experiencia histórica concreta de modo diferenciado.

Las últimas tres fuentes del pluralismo que aquí propongo estarán estructuralmente integradas en las anteriores. Vale la pena destacarlas, sin embargo, porque es a través de ellas como se concreta la pluralidad y se *verbaliza* el conflicto.

La transición política. Siempre habrá nostálgicos del régimen de partido de Estado cuyos amplísimos consensos sociales lograron de modo simultáneo crecimiento económico, estabilidad social y orden político.² Pese a esas nostalgias, lo cierto es que el crecimiento demográfico, el crecimiento económico, el decrecimiento que causan las crisis recurrentes del capitalismo, y los intentos mismos de construir consensos en una sociedad cada día más compleja, impiden la restauración de ese viejo régimen.

La democracia (con todos sus defectos burgueses y socialdemócratas) es la forma política más consecuente con los niveles de complejidad social de México. Pero la democracia en sí misma implica perpetua movilización, continuo faccionalismo y aparición incesante de lo que los estadounidenses llaman *political entrepreneurs*: líderes políticos individuales que *crean opinión* (a favor y en contra) tanto por sus ideas como por sus personas. Alrededor de los liderazgos, una democracia sana tiende a formar –si nos tomamos el cuidado de revisar la historia con cierta perspectiva– bandos permanentes, organizados en un espectro que los antiguos solían llamar *izquierdas* y *derechas*.

Las comunidades rurales de México no fueron ajenas a este proceso. De hecho, desde muy atrás (en los años treinta) se les llamó a votar para evitar que “la reacción” arrollase en las urnas a los ilustrados admiradores de la revolución mexicana. El *voto verde* priista

² Para el caso, véase: Adolfo Orive, *La difícil construcción de una utopía*, UNAM, México, 2003.

provocó algo que los supremos caciques criollos y urbanos del viejo régimen hubiesen evitado, de no haber sido imposible: la exigencia, cada década más organizada –consciente de sí–, de que el pacto se cumpliera, que el régimen integrara efectivamente a sus componentes rurales. Del incumplimiento de las promesas de la revolución mexicana al campesinado nacieron militancias irreconciliables en ejidos y comunidades. Unos, como los choles zapatistas-perredistas, abandonaron el pacto histórico con el régimen que –en los días de Cárdenas, el grande– les dio la tierra a sus abuelos. Otros, como los choles de Paz y Justicia, se sostuvieron fieles por enésima vez al pacto, aceptaron la ayuda del gobierno e hicieron *lo debido* (sólo para ser abandonados por el Ejército cuando dejaron de ser útiles o se volvieron un *problema de imagen*).

Las historias de la militancia política en cada entidad federativa, en cada región y en cada ciudad, documentan procesos similares de complejización creciente e imparable del sistema político.

La diversidad religiosa. Como si la maldición de la complejidad no fuese ya tan grande, las comunidades religiosas se han apresurado, en los últimos cien años, a hacer *misión* y a *convertir*. El reavivamiento de lo religioso, en todo el mundo (véanse los nuevos islamismo e hinduismo), tiene que ver por principio de cuentas con la crisis que provoca la complejidad. Si la complejidad previa de las comunidades permitía aparentar cierta homogeneidad, ante el quiebre de las instituciones sociales conocidas los individuos buscan, idealizan, una comunidad espiritual. Más cerca de la materialidad, la diversidad religiosa ofrece a individuos y familias *paquetes de identidad prêt-à-porter* (*kit de identidad para llevar*, lo llamarían los mercaderes). Las nuevas identidades religiosas sirven bien para formalizar nuevas comunidades dentro de las antiguas, unir a sus integrantes de modo más firme y distinguirlos del resto (“los no convertidos”). El proceso no es nuevo: los presbiterianos choles de Chiapas eran una de las redes más activas en apoyo al reparto de las fincas de estadounidenses y alemanes en Tumbalá allá por la década de los treinta. El fenómeno no es exclusivo de un grupo: los católicos samuelistas juegan el mismo papel social que los cristianos evangélicos en Los Altos de Chiapas (disidencia organizada y reprimida por los caciques tradicionalistas). El fenómeno no termina en el universo conceptual cristiano: se está repitiendo respecto de las dos *ummas* chamulas de conversos al islam en San Cristóbal de Las Casas.

La diversidad étnica. Hace tres lustros, José Agustín Ortiz Pinchetti escribió una serie de artículos en *La Jornada* acerca de *criollos* y *nacos*. Señalaba que este país se sigue llamando Nueva España y el tono de la piel sigue estableciendo fronteras sociales que no por ser visibles son menos infranqueables. La contrarreforma salinista al artículo 27 destruyó el discurso agrarista del viejo régimen y dejó al campesinado sin esperanzas simbólicas dentro del discurso occidental progresista. Es decir, con el reparto agrario clausurado, el rezago acumulado en la entrega de tierras (terrible en el caso chiapaneco y en otras zonas indígenas) y la obvia preferencia del Estado por los *empresarios rurales*, la denominación *campesinos* dejó de tener relevancia práctica. Algunos, como dice Armando Bartra, trataron de “edificar aparatos económicos eficientes y ser buenos empresarios”. Se trataba de lograr una especie de “liberación librecambista de los campesinos”.³ Nada nuevo: el viejo sueño criollo de hacer que los indígenas dejaran de ser *peasants* (campesinos) para volverse *farmers* (agricultores). Como para compensar, el salinismo “ofreció” la reforma del artículo 4º constitucional que introdujo en la carta magna la idea de la pluralidad étnica y recordó a los campesinos que también eran indígenas. Un ejemplo más de la tragedia del aprendiz de brujo. Ante el fracaso de la “emancipación librecambista” y los embates de la liberación de los mercados, los campesinos más atropellados utilizaron su identidad india como bandera organizativa. De allí al grito culturalista de *Todos somos indios* y a la proclama cuasiinsurgente de *Todos somos Marcos* sólo había un paso. Los salinistas recordaron muy tarde la seca tendencia de Humboldt, quien, analizando la posibilidad de reformas sociales en la Nueva España del 1800, opinaba que éstas serían imposibles porque los europeos y criollos temían que cualquier concesión a los indios abriese un expediente por el cual éstos reclamasen de golpe todos sus agravios de siglos.

El etnicismo abre una gama completa de diferenciaciones y complejidades: los caciques tradicionalistas de Chamula alegaron su indignidad para oponerse a la aplicación, por parte de los gobiernos priistas, del artículo 3º constitucional; los insurgentes y milicianos zapatistas

³ Armando Bartra, “Sur. Megaplanes y utopías en la América Equinoccial” en Armando Bartra (coord.), *Mesoamérica, los ríos profundos*, Instituto Maya / El Atajo / Casa Juan Pablos / Unión Nacional de Organizaciones Campesinas, México, 2002.

dicen representar la voz de los indígenas de México; los militantes de Paz y Justicia defienden al pueblo chol de las doctrinas “exóticas” de catequistas y guerrilleros; y un largo etcétera. La etnicidad, como bandera de unidad social, tampoco resuelve la complejidad: la aumenta.⁴

Volvamos a las tierras bajas de Tila. Durante las negociaciones que la administración de Ruiz Ferro se vio obligada a abrir en el ejido Miguel Alemán Valdés, luego de los incidentes de diciembre de 1995, el subdelegado de la Procuraduría Agraria en Palenque estaba preocupado porque el desplazamiento de la población, causado por la división de las comunidades, estaba transformando la región en un tablero de damas en el cual todas las diferenciaciones culturales, económicas, políticas y religiosas empezaban a coincidir. En su opinión, la única política sana del Estado era detener los desplazamientos y obligar a las comunidades a *administrar* internamente sus diferencias. De otro modo, el escenario sería el de una guerra civil.

Obviamente, la opinión de este cuadro medio de la burocracia agraria no fue escuchado. A partir de 1996 otros intereses más urgentes se impusieron. Apenas los vamos reconociendo de modo claro. Desde la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos denunciamos tanto la guerra civil que sufrieron los choles, como la guerra de baja intensidad que impuso el Ejército en todo Chiapas. Se trataba de hacer la guerra, del modo más callado posible, a la insurgencia zapatista. Para ello, el viejo régimen utilizó a las facciones de la sociedad que estuviesen dispuestas a “hacer lo debido”, como dijo ese militante de Paz y Justicia. La estrategia se generalizó en toda la entidad: durante 1997, de Los Altos, al campo de sacrificio de Acteal, en Chenalhó; durante 1998, en Las Cañadas de Ocosingo, donde el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) tuvo poco éxito ante la hegemonía política del zapatismo, pero ha causado muertes y lesiones.

La estrategia contrainsurgente de la guerra de baja intensidad se volvió, ella misma, causa de división y complejidad. Desde 1997, varias comunidades choles de Paz y Justicia abandonaron la organización paramilitar y buscaron hacer la paz, por su cuenta, con sus vecinos zapatistas y perredistas. Algunas lo lograron, otras no. De entre los muchos

⁴ Niklas Luhmann, “The State of the Political System” en *Essays on Selfreference*, Columbia University Press, Nueva York, 1990.

agravios comunitarios y personales que se causan en una guerra civil, algunos son imperdonables. Son tan graves que la división causada separará permanentemente a familias, comunidades y regiones. Vale la pena señalar aquí que el ejido Emiliano Zapata, de Tila, que hoy reclama la salida del Ejército mexicano de sus tierras, era parte de Paz y Justicia y en esa calidad solicitó la instalación de la base castrense hoy en disputa. Los ejidatarios son parte de una de las organizaciones sucesoras de Paz y Justicia, la Unión Campesina Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF), pero ahora coinciden con zapatistas y perredistas en pedir la salida de los militares. Siguen divididos, pero han hallado un consenso. ¿Cuánto durará éste? No sabemos. Sabemos que terminará y que las facciones volverán a oponerse unas a otras. ¿Justifica ello la presencia permanente del Ejército, como dice el general Morales? No. Si toda división social requiriese, para ser enfrentada, a las fuerzas armadas, el mejor régimen político sería una dictadura militar totalitaria. Así como la democracia inglesa surge de una enredada cadena de acontecimientos (la sangrienta guerra civil de la década de 1640, la dictadura republicana de Cromwell, la restauración de los últimos Estuardos, la Glorious Revolution de la década de los 1680, el largo y corrupto gobierno *whig* de los años 1700 y la revolución industrial y liberal), los choles de las tierras bajas pueden y deben ir encontrando, en su propia praxis como sujetos de la Historia, el modo de tolerarse unos a otros y funcionar dentro de complejidades crecientes. Ya entenderán –¿ya entenderemos?– que, como decía Maquiavelo: la división no es fuente de problemas sino generadora de fortaleza.

En este mes, la opinión pública debate el caso de Tlalnepantla, Morelos. Si se mira bien, se trata de un caso análogo. Diferencias sociales concurren, y polarizan una comunidad. Los aparatos de seguridad del gobierno intervienen y, antes siquiera de entender lo que está pasando, refuerzan la división “escogiendo gallo” y poniendo todo el peso del Estado de parte de una de las facciones. La consecuencia: el desplazamiento de la facción perdedora.

El desplazamiento no tiene que ser un fenómeno rural. En las zonas marginales de nuestras ciudades, desde los años setenta, se han desarrollado organizaciones populares que organizan la demanda de vivienda. De nuevo, si se analizan algunos de los conflictos que esas organizaciones han vivido, encontraremos los elementos descritos aquí: una comunidad cuya complejidad aumenta; conflictos que se

agudizan y llegan (o pueden llegar) al extremo de enfrentamientos; y salida de una parte de la comunidad del área habitacional hasta entonces común. En algunos campamentos de estas organizaciones populares, la facción hegemónica incluso recurre a la fuerza para imponer su control y asegurarse de que en su asentamiento urbano sólo vivan los miembros leales a ella.

Desplazamientos que fueron rurales en su origen pueden provocar fenómenos urbanos. Tal es el caso de los expulsados de Chamula, cuya llegada a San Cristóbal de Las Casas tiene todas las características del desplazamiento, pero cuyas consecuencias han sido perdurables, de tal manera que hoy en día hablamos de la *indianización de la antigua Ciudad Real*, o de la *urbanización* de la población chamula de San Cristóbal.

Entendida la naturaleza del fenómeno, vale la pena hacer unos apuntes mínimos de los pormenores de los desplazamientos que primero generaron conciencia nacional sobre el problema, es decir, los de la región chol. Las condiciones del desplazamiento cambian dependiendo de los recursos económicos disponibles.

En el municipio de Tumbalá, el desplazamiento más conocido ocurre en el viejo ejido Emiliano Zapata, en donde la mayoría de la población (de filiación zapatista) abandona la cabecera ejidal (zona urbana del ejido) por presiones de la minoría de filiación priista, en el verano de 1995, cuando el contraataque del Ejército mexicano sobre los zapatistas de Las Cañadas parecía cambiar la suerte de la guerra a favor del gobierno. Los desplazados fundan un nuevo centro que llamaron Chulakjé Ixtiejá. Al entrevistar a varios de sus delegados en el CDHFBC, nos enteramos de que, pese a haber perdido la zona urbana, los ejidatarios desplazados controlaban más de 75 por ciento de la tierra cultivable del viejo ejido. Aparte, estaban en posesión de varias pequeñas fincas de propiedad individual (o copropiedades) que sus familias habían adquirido desde la década de los cuarenta, cuando se formó el ejido. Finalmente, los desplazados también controlaban varias pequeñas propiedades de los ejidatarios priistas. Es decir, los desplazados estaban, en materia estrictamente agrícola, en mejores condiciones que quienes habían permanecido en la cabecera. Éstos encontraban solamente los servicios urbanos y las comunicaciones, lo que los hizo mucho más dependientes del gobierno. Este desplazamiento, pese a su violencia y al dolor causado en sus familias, forma parte de un proceso más amplio y de largo plazo: la división de los

grandes ejidos creados por la reforma agraria en la década de 1940 en ejidos menores, cuando cada una de las poblaciones anexas del ejido original reclama autonomía política y organizacional (lo que se expresa en el deseo de tener “su propia asamblea”). Al parecer, este patrón fue recurrente en Tumbalá luego de 1995, lo que hizo más llevadera la condición de desplazamiento.

Algo similar ocurrió en Sabanilla, donde existían varias propiedades privadas de los *kaxlanes* de la cabecera municipal. Luego de 1994, todas esas fincas fueron recuperadas por los campesinos choles tzotziles del municipio. En las tierras recuperadas se crearon nuevos asentamientos, en los cuales la población desplazada, que siempre era de filiación zapatista-perredista, encontró refugio. El caso más claro es el de la finca Morelia, un conjunto de varias “pequeñas propiedades” de 300 ha que había sobrevivido a varios intentos de reparto desde los años de 1950. Esta finca fue recuperada en 1994 y en su viejo caso se fundó el poblado Nueva Revolución de Tila. En 1997 este nuevo asentamiento recibió un contingente considerable de desplazados del ejido El Paraíso. La gran extensión de las tierras recuperadas permitía sostener tanto al grupo original de campesinos *recuperadores* como a los desplazados. Sin embargo, y contrario al caso de Tumbalá, en Sabanilla los desplazados han insistido en regresar a sus comunidades originales. Probablemente ello se deba a dos factores: primero, a que no hay un proceso histórico de división de grandes ejidos, como en Tumbalá; segundo, a que los ejidos originales son fruto de una lucha agrarista muy reciente (1976-1980), por lo que las ligas emocionales y económicas de los desplazados con el asentamiento original siguen siendo mayores que las que pueda tener u ofrecer el lugar de desplazamiento.

Finalmente, los desplazados de las tierras bajas de Tila vivieron las peores condiciones de todos. Allí no había tierras sobrantes en los lugares de desplazamiento. En septiembre de 1995, la oleada de desplazados del ejido Miguel Alemán Valdés se refugió en el gran ejido Masojá Jolnixtié, cuyas tierras están en el valle del río Jolnixtié. Pero cuando Paz y Justicia vuelve a atacar en junio de 1996, los mismos zapatistas-perredistas de Jolnixtié, primera sección, y Jolnixtié, segunda sección (Libertad), debieron huir a las montañas. Allí los ejidos que los acogieron eran muy pequeños, ubicados en el último macizo montañoso del norte de Chiapas.

La tipología que propongo explica las expectativas diferenciadas de los desplazados: los reclamos de los desplazados de las tierras bajas eran urgentísimos, y su necesidad de reincorporarse a las comunidades de origen, imperiosa. Fueron las primeras comunidades en regresar, en diciembre de 1996. Aparte, en el caso del ejido Masojá Jolnixtié, varias de las comunidades desplazadas eran de mayoría abrumadoramente zapatista-perredista, por lo que el desplazamiento las había dejado prácticamente abandonadas. Las autoridades agrarias regionales temían que el grupo paramilitar Paz y Justicia pretendiese apropiarse legalmente de ellas. Esa opción habría desenmascarado definitivamente la naturaleza del conflicto (una guerra de baja intensidad), pues implicaba la conquista y la ocupación del territorio enemigo. Finalmente, el propio Ejército mexicano permitió el retorno de los desplazados pues, al empujar a los “disidentes políticos” a la sierra, los de Paz y Justicia habían hecho exactamente lo contrario de lo prescrito en los manuales de contrainsurgencia: en lugar de separar a la población civil de la guerrilla, los habían puesto en el mismo lugar.

Mientras tanto, los desplazados de Tumbalá parecen haberse asentado de manera definitiva en sus nuevas comunidades y sus reclamos se refieren sobre todo a reparaciones por lesiones, demanda de justicia en cuanto a los asesinatos, entre otros. Paradójicamente, en este municipio el desplazamiento habría fortalecido el proceso autonómico zapatista, al aislar en las cabeceras municipal y ejidales a la población priista. Por su parte, Chulakjé Ixtiejá prospera. (Al menos estas son las últimas noticias que tuve de este poblado zapatista.)

En Sabanilla, como he dicho antes, los desplazados mantienen una relación poderosa con sus lugares de origen y, pese a contar con recursos para sostenerse en el lugar de desplazamiento, insisten en regresar a sus ejidos originales.

Los anteriores ejemplos nos hablan de las consecuencias del desplazamiento. Una dimensión de la complejidad social es el paso del tiempo y el avance de las generaciones. Los niños y las niñas de 10 años en 1995, hoy son ya ciudadanos, probablemente casados y con hijos propios. ¿A qué comunidad pertenece esta nueva generación? En el caso de Nueva Revolución de Tila, los desplazados de El Paraíso tienen intereses contradictorios. Por una parte no desean perder definitivamente sus derechos ejidales en la comunidad de origen,

pero por otra sus hijos no tiene la esperanza de obtener esos derechos allí. Por ello, desearían mantener algún derecho en la comunidad de refugio.

Para documentar la complejidad de esta dimensión tenemos el ejemplo de los expulsados de Chamula en la (antes) ciudad blanca de San Cristóbal (habría que llamarla oficialmente Jovel). Estas comunidades de refugio son ahora colonias de la ciudad y, desde la elección municipal de 2001, han empezado a jugar un papel propio en la política municipal (aunque no el que esperaban muchos observadores).

¿Cómo legislar en materia de desplazamiento?

Al respecto, me atrevo a hacer sólo unos señalamientos mínimos:

1. No debe legislarse para el caso específico que llevó el asunto al debate público en México (desplazamientos en Chiapas como consecuencia de la rebelión y la guerra de baja intensidad).
2. Debe definirse con claridad la naturaleza del fenómeno: conflicto civil que lleva a la expulsión violenta de la población de su lugar de asentamiento.
3. La naturaleza de conflicto civil violento es una de las causas por las que los gobiernos tienen dificultad en abordar el tema. Aceptar que existe tal tipo de conflicto es confesar que el Estado constituido ha perdido el control total del territorio en donde ocurre ese fenómeno. El Estado, garante y sinónimo de la paz, no puede reconocer que es incapaz de imponer a sus súbditos la solución pacífica de sus disputas.
4. Si se logra superar la reticencia mencionada, la legislación debe considerar al menos tres temas:
 - a) La atención urgente de la población desplazada. Ésta puede equipararse a población *evacuada o damnificada* en materia de protección civil y por lo mismo sujeta de asistencia social (pública y privada). El Estado tiene el deber de asistir a esta población y el deber de permitir que otros (organizaciones asistenciales y humanitarias) la asistan.
 - b) La reconciliación de la comunidad que sufrió el desplazamiento, lo que implica la restauración (o establecimiento)

de un sistema jurídico y judicial que permita saldar los agravios.

- c) La situación de la población que permanecerá de modo definitivo en los lugares de desplazamiento. Si el conflicto civil que provoca el desplazamiento dura más de cinco años, el desarrollo normal de los grupos de edad entre los desplazados creará situaciones que requieran la regularización del estatus del desplazado en su nuevo asentamiento.

Concluyo con la última anécdota. El 16 de diciembre de 1995, luego de acompañar a los representantes de los desplazados del ejido Miguel Alemán Valdés a Shucjá, regresé a la cabecera Miguel Alemán en el camioncito de transporte del municipio (en esos días gobernado por Paz y Justicia). El chavo chalán del vehículo iba conmigo en la caja, él trepado en los tubos que sostienen la lona cuando llueve, yo recargado en las redilas. Me dice muy serio el chico de quince años: “Lo que pasa es que no se puede vivir con dos partidos en la comunidad”. Le contesto, seco: “En el Distrito Federal tenemos tres partidos”. Un gesto de horror y asombro se pintó en el rostro del muchacho.

El problema es la complejidad y la capacidad o incapacidad de las comunidades humanas de lidiar con ella.

Referencias

- ALEJOS García, José: *Mosojántel / Etnografía del discurso agrarista entre los ch'oles de Chiapas*, Coyoacán, UNAM, 1994.
- BARTRA, Armando: “Sur. Megaplanes y utopías en la América Equinoccial” en Armando Bartra (coord.), *Mesoamérica, los ríos profundos*, Instituto Maya / El Atajo / Casa Juan Pablos / Unión Nacional de Organizaciones Campesinas, México, 2002, pp. 13-132.
- BELLINGHAUSEN, Herman: “Demanda común en el ejido Emiliano Zapata. Opositores al EZ también exigen que salga el Ejército” en *La Jornada* (México), 23 de enero de 2004.
- CENTRO de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (editor: Federico Anaya Gallardo): *Ni paz, ni justicia o Informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los ch'oles en la zona norte de Chiapas*, CDHFBC / Impretei, San Cristóbal de Las Casas, 1996.

LUHMANN, Niklas: “The State of the Political System” en *Essays on self-reference*, Columbia University Press, Nueva York, 1990, pp. 165-190.

MORALES Bermúdez, Jesús: *Memorial del tiempo o vía de las convenciones*, Premio Bellas Artes de Literatura, Testimonio 1986, Instituto Nacional de Bellas Artes / Editorial Katún, México, 1987.